

Expediente Núm. 351/2013
Dictamen Núm. 289/2013

V O C A L E S :

Fernández Pérez, Bernardo,
Presidente
García Gutiérrez, José María
Zapico del Fueyo, Rosa María
Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis
Fernández Noval, Fernando Ramón

Secretario General:
García Gallo, José Manuel

El Pleno del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2013, con asistencia de los señores y la señora que al margen se expresan, emitió el siguiente dictamen:

“El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, a solicitud de esa Alcaldía de 24 de octubre de 2013, examina el expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Oviedo formulada por, por las lesiones sufridas como consecuencia de una caída en la vía pública.

De los antecedentes que obran en el expediente resulta:

1. Con fecha 3 de julio de 2012, el interesado presenta en el registro del Ayuntamiento de Oviedo una reclamación de responsabilidad patrimonial por las lesiones padecidas como consecuencia de una caída en la vía pública el día 16 de enero de 2008.

Manifiesta que “sobre las 8:10 horas (...) transitaba como peatón por la calle (...), por la acera (...) correspondiente a los inmuebles con número impar (...) en dirección a la calle, al llegar a la confluencia con esta última cruzó el paso de peatones (...) y una vez superado el mismo, nada más

alcanzar la acera contraria, correspondiente a la esquina que hacen la calle, números pares, y la calle, números impares, casi enfrente del edificio nº 130 (...), dado el estado deslizante del pavimento a consecuencia de la lluvia que caía y el desnivel pronunciado de la acera en ese lugar, sufrió una caída". Fue atendido "inicialmente por una señora y un joven presentes en las inmediaciones" y, como "no podía levantarse (...), una de dichas personas" avisó "al 112", siendo trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital

Afirma que el titular de un establecimiento comercial le manifestó que "le había visto caer (...), informándole (...) de que en ese mismo lugar y por idénticas causas ya habían caído con anterioridad y con posterioridad a su accidente varias personas más". Añade que "otra vecina del barrio" -a la que identifica- le "hizo saber" que el "día 24 de mayo de 2009 había sufrido una caída en el mismo sitio y de la misma manera, a pesar de que el día era soleado, fracturándose el tobillo". Precisa que "poco tiempo después los servicios municipales procedieron a colocar en el lugar una barandilla y a lijar y/o abujardar el pavimento de la acera".

Reseña daños físicos, consistentes en "fractura del tercio medio de la tibia y del peroné de su pierna derecha", que fueron diagnosticados en el Hospital el día del accidente, donde procedieron a su inmovilización con "doble férula de yeso", e indica que fue intervenido en una clínica privada el día "22 de enero". Precisa que la "evolución de la herida quirúrgica fue mala" y que posteriormente, después de diversas consultas, se le realiza "una limpieza quirúrgica de la herida, lo que tiene lugar el día 10 de septiembre", afirmando que la "evolución osteoarticular tampoco fue buena", por lo que se le interviene de nuevo el 27 de enero de 2010 y, ante la "evolución tórpida", el 22 de diciembre es nuevamente operado. Tras una "buena evolución" es "dado de alta hospitalaria" y con fecha 4 de agosto de 2011 "ingresa en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación". Recibe el alta definitiva el día 23 de diciembre de 2011 con secuelas de "flexión dorsal de 10º, flexión plantar de 30º, supinación normal, pronación de 10º".

Solicita una indemnización por importe total de ciento noventa y seis mil setecientos cuarenta y siete euros con trece céntimos (196.747,13 €), que desglosa en los siguientes conceptos: 56 días hospitalarios, a razón de 67,98

€/día, 3.806,88 €; 1.352 días impeditivos, a razón de 55,27 €/día, 74.725,04 €; 21 puntos de secuelas -11 "funcionales" y 10 "estéticas"-, a razón de 1.190,90 €/punto, habida cuenta la edad del perjudicado en la fecha del accidente -31 años-, 25.008,90 €; un 10% de factor de corrección por "perjuicios económicos", 2.500,89 €, y "daños morales complementarios" (Tabla IV: lesiones permanentes que constituyen una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima: permanente total con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado)", 90.705,42 €.

Adjunta a su reclamación, entre otros, copia de los siguientes documentos: a) Tres fotografías del lugar de los hechos. b) Un croquis en el que se indica el trayecto seguido por el reclamante y el lugar de la caída. c) Justificante de su traslado en ambulancia hasta el Servicio de Urgencias del Hospital d) Informe del Área de Urgencias, de 16 de enero de 2008, en el que se pauta inmovilización con doble férula de yeso. e) Informe de alta hospitalaria, de fecha 30 de enero de 2008, tras habersele realizado osteosíntesis de tibia y peroné. f) Informe del Servicio de Traumatología de la mutua, de 16 de julio de 2008. g) Informe del Área de Urgencias del hospital, de 8 de agosto de 2008, por infección de la herida. h) Informe emitido por la mutua el 8 de agosto de 2008 para el traslado del paciente al hospital, al entender que "precisa tratamiento especializado urgente". i) Informe del Servicio de Traumatología del hospital, de 29 de octubre de 2008, en el que se detalla que con fecha 10 de septiembre de 2008 "se realiza limpieza" quirúrgica y es dado de alta" en el Servicio de Cirugía Plástica "el 2-10-08". j) Informe del Servicio de Traumatología del hospital de 14 de noviembre de 2008, en el que consta "limitación funcional del tobillo en un 50% de su movilidad". k) Informe de un cirujano ortopédico, de fecha 23 de diciembre de 2008, en el que se recomienda "tratamiento quirúrgico". l) Informe del Servicio de Medicina Nuclear de 16 marzo de 2009, en el que se consigna el resultado de la gammagrafía ósea realizada. m) Informe del Servicio de Traumatología del hospital, de 21 de diciembre de 2009, en el que se propone la "realización de tratamiento quirúrgico". n) Resolución de la Directora Provincial de Asturias del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 14 de enero de 2010, por la que se

declara al reclamante en situación de "incapacidad permanente en el grado de total para la profesión habitual". ñ) Informe de alta del Servicio de Traumatología, de 5 de febrero de 2010, una vez practicada la intervención quirúrgica. o) Informe de alta del Servicio de Cirugía Plástica, de 16 de junio de 2010, tras la realización de una arteriografía. p) Informe de alta del Servicio de Cirugía Plástica, de 18 de enero de 2011, después de haber efectuado el 22 de diciembre de 2010 un "desbridamiento de tejidos blandos (...). Se realizó anastomosis microquirúrgica de arteria (...). Cierre del defecto (...) con interposición de pequeño injerto". q) Resolución de la Directora Provincial de Asturias del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 31 de mayo de 2011, por la que se acuerda revisar por mejoría el grado de incapacidad del interesado y que con "efectos 01-06-2011 dejará de percibir la pensión que tiene reconocida". r) Informe de alta del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del hospital, de 24 de noviembre de 2011, en el que consta que presenta en el tobillo derecho "flexión dorsal 10º, flexión plantar 30º, supinación normal, pronación 10º", y se considera dicha exploración "como secuela". s) Sentencia del Juzgado de lo Social N.º 6 de Oviedo de 24 de febrero de 2012, por la que se declara al reclamante "afectado de la incapacidad permanente total para su profesión habitual". t) Informe pericial, de 11 de abril de 2012, en el que se describen minuciosamente el tiempo de tratamiento, las secuelas permanentes, los días de hospitalización, los dolores secuales, el perjuicio estético y la limitación funcional, reiterándose la incapacidad permanente total para su profesión habitual -electricista-. u) Cuatro fotografías del estado de su pierna.

2. El día 23 de julio de 2012, el Jefe de la Sección de Apoyo Técnico de Ingeniería y Obras del Ayuntamiento de Oviedo emite un informe en el que refiere que "la acera de la calle, en su entronque por la margen derecha con la de la calle se encuentra en correctas condiciones de conservación, no existiendo obstáculo o defecto alguno para el tránsito peatonal". Especifica que el pavimento es de "baldosa tipo terrazo, de 40 x 40 cm, semigranallada" y que en la "zona donde se produjo el accidente" la baldosa se "había colocado a finales de 1998", añadiendo que este tipo de pavimento "con el uso va

adquiriendo más rugosidad, al producirse un desgaste y quedar el árido en superficie". Indica que se "acompaña foto actual obtenida en uno de los laterales de la acera donde no existe prácticamente desgaste y por tanto se puede apreciar la baldosa de origen", y señala que la "pendiente de la acera en el entronque de las calles es variable. Por la configuración de las mismas se obtienen unas pendientes del 12% en línea de bordillo y del 14,5% a 2,00 metros de este. En línea con la fachada la pendiente que resulta es del 21%".

Adjunta cuatro fotografías de la zona.

3. Con fecha 30 de julio de 2012, la Jefa de la Sección de Vías comunica al interesado la fecha de recepción de su reclamación, el plazo máximo de duración del procedimiento y los efectos del silencio administrativo.

Ese mismo día pone en conocimiento de la correduría de seguros y de la compañía aseguradora la apertura del expediente.

4. Mediante escrito notificado a los testigos propuestos los días 1 y 9 de agosto de 2012, la Jefa de la Sección de Vías los cita para que comparezcan en las dependencias municipales "a fin de prestar su testimonio sobre las circunstancias que concurrieron en la caída".

Con fecha 7 de agosto de 2012 se practica la prueba testifical. El testigo personado, que manifiesta no tener ninguna relación con el reclamante, indica que el accidente se produjo "entre las 8 y 8:15 de la mañana" en la esquina de la "c/ con c/" y que se encontraba dentro de su local de negocio, "en la esquina opuesta al lugar del suceso". Afirma que "lo vio resbalar y caer al suelo", que desconoce el tipo de calzado que llevaba el accidentado y, en relación a las circunstancias climatológicas, señala que había "mucho lluvia".

Mediante escrito presentado en el registro municipal el 23 de agosto de 2012, la otra testigo comunica "la imposibilidad de facilitar dato alguno", puesto que "en ningún momento fue testigo de tal suceso".

5. El día 23 de enero de 2013, la Jefa de la Sección de Gestión de Patrimonio solicita a la Agencia Estatal de Meteorología un certificado sobre las condiciones

meteorológicas existentes los días 15 y 16 de enero de 2008, a lo que se da cumplimiento el 28 de febrero de 2013.

6. Con fecha 19 de marzo de 2013, la Jefa de la Sección de Vías notifica al reclamante la apertura del trámite de audiencia “por un plazo de 10 días (...), pudiendo presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estime pertinentes”. Se acompaña una relación de los documentos que componen el expediente.

7. El día 2 de abril de 2013, el perjudicado presenta en el registro municipal un escrito de alegaciones en el que solicita que se tome “nueva declaración al testigo” a fin de aclarar si la zona en la que se produjo el accidente era considerada como “un punto negro” debido al “tipo y estado del pavimento”, y que se compruebe si la citada como testigo había “sufrido una caída en el mismo lugar”. Asimismo, insta al Ayuntamiento a que averigüe y detalle “las obras llevadas a cabo” en ese sitio “con posterioridad” al accidente.

8. Con fecha 15 de abril de 2013, el Jefe de la Sección de Apoyo Técnico de Ingeniería y Obras emite un informe en el que refiere que la baldosa de dicha “esquina (...) fue abujardada (...) en el mes de diciembre de 2009” y que se “instaló una barandilla en junio de 2010”.

9. Mediante escrito de 30 de mayo de 2013, la Jefa de la Sección de Vías notifica al reclamante, a la correduría de seguros y a la compañía aseguradora la apertura de un nuevo trámite de audiencia “por un plazo de diez días”.

10. Con fecha 21 de junio de 2013, el interesado presenta en el registro municipal un escrito de alegaciones en el que afirma que las obras de abujardado y de instalación de la barandilla realizadas “a posteriori” son una “prueba objetiva más” de que el lugar donde se produjo el accidente era “una zona deslizante y peligrosa”. Reitera su petición de que se tome “nueva declaración del testigo” y de que se compruebe el accidente sufrido el día “24 de mayo de 2009” por la otra persona citada como testigo.

11. Mediante escrito notificado al reclamante el 21 de agosto de 2013, la Jefa de la Sección de Vías le traslada la Resolución del Concejal de Gobierno de Economía por la que se rechaza “la práctica de la prueba consistente en una nueva declaración del testigo”, dado que ha sido emitido un nuevo informe técnico, y se califica el testimonio propuesto “como improcedente, puesto que se pretende obtener del testigo una información de carácter eminentemente técnico”. Se acepta, en cambio, la comprobación de si la otra persona -citada como testigo- “había formulado reclamación ante el Ayuntamiento”.

12. Con fecha 28 de agosto de 2013, la Jefa de la Sección de Vías notifica al reclamante, a la correduría de seguros y a la compañía aseguradora la apertura de un nuevo trámite de audiencia.

13. El día 9 de octubre de 2013, la Jefa de la Sección de Vías emite un informe en el que consta que la testigo identificada por el reclamante presentó “con fecha 2 de septiembre de 2009” una reclamación de responsabilidad patrimonial tras la caída sufrida “en la calle y”. Añade que mediante Resolución de 18 de enero de 2010, “que ha devenido firme, se desestima la reclamación”.

14. Mediante escrito de 9 de octubre de 2013, la Jefa de la Sección de Vías comunica al reclamante, a la correduría de seguros y a la compañía aseguradora la apertura de un nuevo trámite de audiencia “por un plazo de 10 días”.

15. Con fecha 21 de octubre de 2013, el perjudicado presenta en el registro municipal un escrito de alegaciones en el que concluye que resulta acreditada “la peligrosidad” del lugar donde se produjo el accidente, “bien por defecto de proyección, bien por defecto de ejecución, bien por inadecuado mantenimiento”.

16. El día 22 de octubre de 2013, un Licenciado en Derecho de la Sección de Vías, con el conforme de la Jefa de Sección, formula propuesta de resolución en

el sentido de desestimar la reclamación presentada, al entender que el estado del pavimento “en el momento de la caída” no era “ni insalvable ni peligroso”, destacando que por dicho lugar transitaban “en estos años (...) cientos de personas” que no sufrieron ningún percance, lo que “desmonta la teoría” de que la zona era considerada “un punto negro”. Añade, finalmente, que las “reparaciones que se realizaron posteriormente se enmarcan dentro de la mejora del estándar de conservación del servicio público”.

17. En este estado de tramitación, mediante escrito de 24 de octubre de 2013, registrado de entrada el día 6 de noviembre de 2013, esa Alcaldía solicita al Consejo Consultivo del Principado de Asturias que emita dictamen sobre consulta preceptiva relativa al procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Oviedo objeto del expediente núm., adjuntando a tal fin copia autenticada del mismo.

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes consideraciones fundadas en derecho:

PRIMERA.- El Consejo Consultivo emite su dictamen preceptivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1, letra k), de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, en relación con el artículo 18.1, letra k), del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo, aprobado por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y a solicitud de la Alcaldía del Ayuntamiento de Oviedo, en los términos de lo establecido en los artículos 17, apartado b), y 40.1, letra b), de la Ley y del Reglamento citados, respectivamente.

SEGUNDA.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), está el interesado activamente legitimado para formular reclamación de responsabilidad

patrimonial, por cuanto su esfera jurídica se ha visto directamente afectada por los hechos que la motivaron.

El Ayuntamiento de Oviedo está pasivamente legitimado en cuanto titular de los servicios frente a los que se formula reclamación.

TERCERA.- En cuanto al plazo de prescripción, el artículo 142.5 de la LRJPAC dispone que “En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas”. En el supuesto ahora examinado, la reclamación se presenta con fecha 3 de julio de 2012, y, si bien la caída de la que trae origen tuvo lugar el 16 de enero de 2008, el interesado tuvo complicaciones en las lesiones sufridas durante los años 2008, 2009 y 2010, siendo dado de alta con secuelas el día 24 de noviembre de 2011, por lo que es claro que fue formulada dentro del plazo de un año legalmente determinado.

CUARTA.- El procedimiento administrativo aplicable en la tramitación de la reclamación se encuentra establecido en los artículos 139 y siguientes de la LRJPAC, y, en su desarrollo, en el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial (en adelante Reglamento de Responsabilidad Patrimonial), aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

En aplicación de la normativa citada, se han cumplido los trámites fundamentales de incorporación de informe de los servicios afectados, audiencia con vista del expediente y propuesta de resolución.

Sin embargo, y en lo que a la práctica de la prueba testifical se refiere, advertimos que, pese a que en el procedimiento administrativo vigente no existe una regulación detallada, la garantía del ineludible principio de contradicción que ha de presidir aquella determina que sea la parte que propone al testigo quien, en principio, ha de realizar el interrogatorio, al margen, claro está, de las preguntas que el instructor considere oportuno hacer. Para ello, cabe citar expresamente a la parte interesada para que

efectúe el interrogatorio al testigo, personalmente o a través de representante, o requerirla para que aporte un cuestionario de preguntas escrito, lo que puede facilitar en gran medida su práctica. Sin embargo, y como ya hemos tenido ocasión de manifestar a esa misma autoridad consultante en asuntos anteriores, observamos que se practicó la prueba testifical sin atender a lo exigido en el artículo 81 de la LRJPAC. El referido artículo establece, en su apartado 1, que la "Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas" y, en su apartado 2, que en "la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan". Pues bien, en el presente supuesto, en la notificación efectuada al testigo propuesto no se consignó la fecha y la hora en que se iba a practicar el interrogatorio. Tampoco se puso en conocimiento del reclamante la posibilidad de estar presente en el momento de realizar la prueba y de proponer preguntas para formularselas. En suma, tal forma de proceder no cumple las exigencias del artículo 81 de la LRJPAC antes citado. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el perjudicado pudo acceder a la declaración testifical con posterioridad y alegar lo que considerase oportuno en el trámite de audiencia, sin que conste que se haya presentado objeción alguna al respecto, no cabe apreciar indefensión.

Por último, se aprecia que a la fecha de entrada de la solicitud de dictamen en este Consejo Consultivo se había rebasado ya el plazo de seis meses para adoptar y notificar la resolución expresa, establecido en el artículo 13.3 del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial. No obstante, ello no impide la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42.1 y 43.3, letra b), de la referida LRJPAC.

QUINTA.- El artículo 106.2 de la Constitución dispone que "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

A su vez, el artículo 139 de la LRJPAC establece en su apartado 1 que “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”. Y, en su apartado 2, que “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.

Por otra parte, el artículo 141 de la ley citada dispone en su apartado 1 que “Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos”.

En el ámbito de la Administración local, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), dispone que “Las Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa”.

Este derecho no implica, sin embargo, que la Administración tenga el deber de responder, sin más, por todo daño que puedan sufrir los particulares, sino que, para que proceda la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, deberán darse los requisitos que legalmente la caracterizan, analizando las circunstancias concurrentes en cada caso.

En efecto, en aplicación de la citada normativa legal y atendida la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública será necesario que, no habiendo transcurrido el plazo de prescripción, concurren, al menos, los siguientes requisitos: a) la efectiva realización de una lesión o daño antijurídico, evaluable

económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; b) que la lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y c) que no sea producto de fuerza mayor.

SEXTA.- El reclamante interesa una indemnización por las lesiones sufridas tras una caída en la vía pública el día 16 de enero de 2008.

Como prueba de los daños, constan en el expediente diversos informes en los que se objetivan la fractura de la tibia y del peroné de la pierna derecha y las diversas intervenciones quirúrgicas sufridas debido a las complicaciones que fueron surgiendo a lo largo de varios años, por lo que debemos considerar acreditada la realidad de los mismos, y cuya evaluación económica realizaremos si concurren los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Oviedo.

Ahora bien, la existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado no puede significar por sí misma la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración, toda vez que es preciso examinar si se dan las circunstancias que permitan reconocer al reclamante el derecho a ser indemnizado por concurrir los demás requisitos legalmente exigidos. En concreto, debe analizarse si los perjuicios alegados son consecuencia directa e inmediata del funcionamiento de un servicio público, y para ello resulta ineludible partir del conocimiento de las causas y circunstancias en que aquellos se produjeron.

El artículo 25.2 de la LRBRL establece que el municipio “ejercerá, en todo caso, competencias (...) en las siguientes materias: (...) d) (...) parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas”, y el artículo 26.1, apartado a), del mismo cuerpo legal precisa que los municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios de limpieza viaria y pavimentación de las vías públicas.

Es evidente, por tanto, que la Administración municipal está obligada a mantener en estado adecuado la pavimentación y limpieza de la vía pública a fin de evitar a los transeúntes riesgos innecesarios, no atribuibles al devenir

normal de la vida en sociedad, por lo que la cuestión que hemos de dilucidar en este momento es si el Ayuntamiento cumplió o no con dicha obligación.

El interesado atribuye inicialmente las lesiones a una caída en la confluencia de las calles y provocada por “el estado deslizante del pavimento a consecuencia de la lluvia que caía y el desnivel pronunciado de la acera en ese lugar”, añadiendo en el escrito de alegaciones de 21 de octubre de 2013 que la peligrosidad de dicha zona puede ser debida a un “defecto de proyección”, a un “defecto de ejecución” o a un “inadecuado mantenimiento”. Como prueba de sus afirmaciones aporta el justificante de haber sido recogido por una ambulancia en una zona próxima al lugar de la caída y la declaración testifical de un comerciante que indica -cuatro años después- que se encontraba “dentro” de su local cuando “vio cómo resbalaba” y se caía al suelo el reclamante.

En cualquier caso, y aun dando por acreditada la existencia de la caída, el perjudicado no aporta prueba alguna sobre las características y las circunstancias en las que se encontraba el citado pavimento, de modo que el supuesto mal estado del mismo se deduce únicamente de sus manifestaciones, lo que no es bastante para tener dicha aseveración por cierta. En cambio, y a este respecto, la Administración incorpora varios informes técnicos que no corroboran lo indicado por él. Así, en el emitido por el Jefe de la Sección de Apoyo Técnico de Ingeniería y Obras el 23 de julio de 2012 -realizado mucho tiempo después (y consecuentemente habiendo soportado mayor utilización)- se refiere que “el tipo de pavimento colocado con el uso va adquiriendo mas rugosidad, al producirse un desgaste y quedar el árido en superficie”, y detalla que la pavimentación de la “zona donde se produjo el accidente” se había “colocado a finales de 1998”, aclarando que en el “desarrollo exterior de la acera, junto al bordillo, dispone de una franja de 0,80 metros de ancha, formada por baldosa hidráulica de 20 x 20 cm, de tacos”, y que “con esa misma baldosa existe una franja transversal en el medio de la curva que señala el rebaje del paso de minusválidos”. A ello hemos de añadir que el reclamante tenía que ser conocedor de las características del pavimento y de la pendiente de la calle, dado que se trata de una zona muy próxima a su domicilio. Por otro lado, de la descripción minuciosa que él mismo hace sobre la ruta seguida

inmediatamente antes del percance, y que se plasma en el croquis que aporta, en el que se determina el lugar exacto de la caída, se concluye que en la zona donde esta se produjo la baldosa es antideslizante, ya que, a tenor del informe citado anteriormente, es hidráulica de tacos; descripción que podemos constatar a través de las fotografías incorporadas al expediente. Igualmente, debemos poner de manifiesto que los documentos gráficos obrantes en este no evidencian desniveles que no sean consustanciales a una calle que se encuentra en pendiente.

Por último, y en cuanto a la alegada “prueba objetiva” de que las obras -de abujardado e instalación de barandilla- realizadas después de la caída conllevan el reconocer que era “una zona deslizante y peligrosa”, este Consejo entiende, como ya señalado en ocasiones anteriores, que las posibles modificaciones que acometa la Administración con posterioridad a la producción de un accidente, sea a consecuencia del mismo o a sugerencia de otros usuarios, no implica en sí misma reconocimiento de irregularidad alguna; más bien revela una intención plausible de mejorar las condiciones preexistentes con el conocimiento que brinda la experiencia.

A la vista de la documentación obrante en el expediente, no puede considerarse acreditada ni la existencia de un pavimento resbaladizo, ni otras características de la vía -susceptibles de ser conceptuadas como peligrosas- descritas en la reclamación. Por otra parte, la existencia probada de lluvia el día del accidente, unido a la pendiente de la calle, obligaba a incrementar el deber de diligencia que tiene cualquier peatón, pues constituían unos factores de riesgo añadidos al general que asume cualquier persona cuando transita por la vía pública.

A juicio de este Consejo Consultivo, las consecuencias del accidente sufrido no resultan imputables a la Administración, ya que nos encontramos ante la concreción del riesgo general que asume cualquier persona cuando transita por la vía pública. Lo que ha de demandarse del servicio público es que no transforme, por su acción u omisión, un mínimo riesgo en peligro, o sea, un daño altamente improbable en un daño eventual, aunque no sea inminente, pero no que elimine o, en su defecto, cubra todo tipo de riesgos, porque se convertiría en un seguro universal que trasladaría a la sociedad en su conjunto

la responsabilidad de cualquier manifestación dañosa de sucesos o accidentes que, aunque ocurran en un espacio público o con ocasión del uso de un servicio público, debe soportar el particular como riesgos generales de la vida individual y colectiva.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias dictamina que no procede declarar la responsabilidad patrimonial solicitada y, en consecuencia, debe desestimarse la reclamación presentada por

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Gijón, a

EL SECRETARIO GENERAL,

V.º B.º

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.